



## JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA

Florencia, 4 de diciembre de 2020

RADICADO:	I1001-33-34-006-2018-00345-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ –COOMOTOR -. <a href="mailto:miricarvajal@yahoo.com">miricarvajal@yahoo.com</a> <a href="mailto:gerencia@coomotor.com.co">gerencia@coomotor.com.co</a>
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. <a href="mailto:notificajuridica@supertrasnporte.gov.co">notificajuridica@supertrasnporte.gov.co</a>
NUMERADOR	ORD. 100-II-2020

### I. ASUNTO.

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la propuesta de conciliación presentada en audiencia inicial celebrada el 25 de noviembre de 2020, por la demandada Superintendencia de Puertos y Transporte, contenida en el acta y obrante en el archivo #10 del expediente judicial electrónico y que fuera aceptada por la apoderada de la demandante.

### II. ANTECEDENTES.

El 25 de noviembre de 2020, en el curso de la audiencia inicial citada a través de auto de 06 de noviembre de 2020, se agotaron las etapas de saneamiento, decisión de excepciones, fijación del litigio y encontrándose en la etapa de conciliación, la demandada Superintendencia de Puertos y Transporte manifestó que el Comité de Conciliación de la entidad presentaba propuesta de conciliación conforme lo prevé el numeral 8 del artículo 180 del CPACA; por su parte, la apoderado de la demandante previa solicitud de traslado de la propuesta, manifestó que aceptaba en su integridad la formula presentada.

#### 2.1. Del acuerdo de conciliación.

Al proceso fue allegado memorial, archivo #08 del expediente judicial electrónico, en el cual se remitió fórmula de arreglo que contenía el acta No. 20 de fecha 18/11/2020, en la cual el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Entidad Demandada, proponiendo lo siguiente:

*“(…)Que en reunión ordinaria de Comité de Conciliación número 20 celebrada de manera no presencial el día 18 de noviembre de 2020, se decidió por unanimidad de los asistentes con voz y voto, conciliar las pretensiones del convocante, relacionadas con el trámite administrativo dentro del cual se profirieron las resoluciones número 2641 del 8 de febrero de 2017, 41588 del 31 de agosto de 2017 y 8599 del 26 de febrero de 2018, puesto que los actos administrativos demandados fueron expedidos en oposición a la Constitución Política y la Ley, de conformidad con el numeral 1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

*Lo anterior debido a que la sanción impuesta fue sustentada en los códigos de infracción contenidos en la Resolución 10800 de 2003 del Ministerio de Transporte, el cual fue objeto de decaimiento al ser esta una reproducción del Decreto Reglamentario 3366 de 2003, el cual fue declarado parcialmente nulo. Así mismo, se motivó la decisión sancionatoria, única y exclusivamente en el IUIT número 406820 del 30 de agosto de 2014, el cual no es representativo ni declarativo de la infracción de transporte.*

*Por lo anterior se realiza ofrecimiento de Revocatoria directa de los actos administrativos acusados, la cual se realizará dentro del término que para el efecto fije el Despacho, sin exceder la oportunidad prevista en el inciso 2º del artículo 95 del C.P.A.C.A., así como la terminación de cualquier procedimiento de cobro que se hubiere iniciado. Una vez efectuada la revocatoria de oficio, el convocante deberá abstenerse de iniciar cualquier tipo de acción judicial, en la que pretenda indemnización de perjuicios y condena en costas, incluidas las agencias en derecho en contra de esta Superintendencia. (…)”*

Así mismo, la apoderada de la parte actora, en audiencia inicial en etapa de conciliación, manifiesta conocer de la propuesta efectuada por la entidad demandada, indicando que acepta la misma.

### III. CONSIDERACIONES.

#### 3.1. ANTECEDENTES NORMATIVOS.

La conciliación judicial en asuntos adelantador por la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra consagrada en los artículos 104 y 105 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, que a la letra disponen:

*“De la conciliación judicial en materia contencioso administrativa.*

*ART. 104. Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el término probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su celebración en cualquier estado del proceso.*

*En segunda instancia la audiencia de conciliación podrá ser promovida por cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo.*

*ART. 105. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquella repita total o parcialmente contra éste.*

*La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél.”.*

En materia contenciosa administrativa, podrán conciliarse aquellos asuntos de carácter particular y contenido económico que se ventilen ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través las acciones de nulidad y restablecimiento, de reparación directa y controversias contractuales<sup>1</sup>.

Aunado a lo anterior, corresponderá al Juez Administrativo la valoración sobre la existencia y validez del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, a fin de impartir la correspondiente aprobación si constata el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso 3º del artículo 73 de la Ley 446 de 1998, el cual en su último inciso señala:

*“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público...”*

Norma de la que se infiere que son requisitos para la aprobación de la conciliación:

1. Que se encuentren acreditados los hechos que sirvan de fundamento al acuerdo conciliatorio.
2. Que el acuerdo no sea violatorio de la ley, es decir, que verse sobre materias conciliables.
3. Que el acuerdo no sea lesivo para el patrimonio público.

---

<sup>1</sup> El Art. 70 de la Ley 446 de 1998 dispone: “Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo (...)”.

### 3.2.EL CASO CONCRETO.

Ante la existencia del mencionado acuerdo de pago, se entrará a determinar si efectivamente se encuentran configurados los supuestos señalados en el Art. 73 de la Ley 446 de 1998, que permitan impartir la aprobación a la conciliación.

**I) Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.**

Se observa que la fórmula de arreglo o acuerdo conciliatorio fue propuesta por la entidad accionada NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y TRANSPORTE, por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, y allegado por la apoderada de ésta quien, dentro de sus funciones para conciliar, conforme se evidencia en el poder visible a folio 146 del archivo #1 del expediente judicial electrónico.

Así mismo, no se discute que la apoderada de la parte actora se encuentra debidamente representada, en tanto quien aceptó la fórmula de arreglo y cuenta con la facultad expresa para conciliar, tal como obra a folio 3 del archivo #1 del expediente judicial electrónico.

**II) Que el acuerdo conciliatorio se ocupe sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.**

Frente a esta premisa encuentra el Despacho que las presentes diligencias se derivan de las actuaciones surtidas por la Superintendencia de Puertos y Transportes a través de (i) la Resolución No. 2461 del 08 de febrero de 2017, con la que se declaró responsable a COOMOTOR LTDA. por contravenir el literal d) del artículo 46 del artículo 336 de 1996, modificado por la Ley 96 de la Ley 1450 de 2011 y demás normas afines, por transgredir la conducta prevista en el artículo 1, código 590 de la Resolución 10800 de 2003, proferida por el Ministerio de Transporte: en consecuencia, le impuso sanción de 10 SMLMV: (ii) Resolución 41855 del 31 de agosto de 2017, por la cual se desató el recurso de reposición confirmando el acto anterior: y (iii) la Resolución 8599 de 26 de febrero de 2018, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto inicial.

En estos términos, como quiera que se trata de un problema jurídico que integra un componente patrimonial debe concluirse que constituye un derecho discutible susceptible de ser conciliado, máxime que el presente asunto no se trata de asuntos aborales o de derechos irrenunciables.

Finalmente es del caso señalar, que el Despacho encuentra que el acuerdo suscrito entre las partes no es lesivo para el patrimonio de éstas.

**III) Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias.**

- Copia del Certificado de Constitución Y gerencia de la empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA., COOMOTOR.
- Copia de la Resolución Administrativa N° 2461 del 08 de febrero de 2017 *“por la cual se falla una investigación administrativa”*
- Copia de la Resolución N° 41588 el 31 de agosto de 2017 *“por la cual se resuelve el recurso de reposición”*.
- Copia de la Resolución N° 8599 del 26 de febrero de 2018 *“por la cual se resuelve el recurso de apelación”*.
- Copia de la resolución N° 24302 del 27 de junio de 201 por medio del cual se apertura investigación administrativa en contra de la empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA., COOMOTOR.

- Copia del radicado N° 2016-560-057731-2 del 28 de julio de 2016 con el cual la empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA., COOMOTOR, presentó escrito de descargos.
- Copia del radicado N° 2017-560-021110-2 del 09 de marzo de 2017, con el cual la empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA., COOMOTOR, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 2461 del 08 de febrero de 2017.

Así mismo, se tiene que, por parte de la Entidad demandada, allegó los antecedentes administrativos de la investigación administrativa adelantada en contra de COOMOTOR LTDA, obrante a folio 149 al 233 del archivo 01ProcesoDigitalizado, del expediente judicial electrónico.

### 3.3. Caso Concreto.

la Resolución No. 2461 del 08 de febrero de 2017, con la que se declaró responsable a COOMOTOR LTDA. por contravenir el literal d) del artículo 46 del artículo 336 de 1996, modificado por la Ley 96 de la Ley 1450 de 2011 y demás normas afines, por transgredir la conducta prevista en el artículo 1, código 590 de la Resolución 10800 de 2003, proferida por el Ministerio de Transporte, de igual manera en la decisión del Comité de Conciliación de la Entidad, señaló: “...la sanción impuesta fue sustentada en los códigos de infracción contenidos en la Resolución 10800 de 2003 del Ministerio de Transporte, el cual fue objeto de decaimiento al ser esta una reproducción del Decreto Reglamentario 3366 de 2003, el cual fue declarado parcialmente nulo. Así mismo, se motivó la decisión sancionatoria, única y exclusivamente en el IUIT número 406820 del 30 de agosto de 2014, el cual no es representativo ni declarativo de la infracción de transporte.

A efectos de establecer si la conciliación propuesta se ajusta a derecho es pertinente mencionar que, según consta en las resoluciones acusadas, la parte actora infringió el código 590 del artículo 1 de la Resolución 10800 de 2003; motivo por el cual es menester traer a colación el concepto emitido por la sala de Consulta y Servicio civil del Consejo de Estado del 05 de marzo de 2019, concluyó:

*“El ejercicio comparativo realizado -al comienzo de este punto- entre el Decreto 3366 y los “códigos” de la Resolución 10800, indica que tales “códigos” se fundamentan en las “infracciones” de las normas declaradas nulas por la sentencia del 19 de mayo de 2016 de la Sección Primera del Consejo de Estado, lo que significa que no tienen fundamento jurídico alguno desde la ejecutoria de dicha sentencia, al desaparecer su fundamento de derecho. Este es un claro ejemplo de pérdida de ejecutoriedad que debe soportar la Resolución 10800 de 2003, según se ha explicado.*

*Por su parte, el informe de “infracciones de transporte” tampoco puede servir de “prueba” de tales “infracciones”, por la sencilla razón de que las conductas sobre las que dan cuenta no estaban tipificadas como infracciones por el ordenamiento jurídico. Es decir, los documentos conocidos como “informe de infracciones de transporte” no son representativos o declarativos de una “infracción de transporte”. en tanto se basen en las conductas “tipificadas” como tales en los artículos del Decreto 3366 de 2003 declarados nulos o en los “códigos” de la Resolución 10800 que a su vez se basan en ellos. Por estas razones no son el medio conducente para probarlas “infracciones de transporte”.*

Lo anterior trae las siguientes consecuencias:

- i) Las actuaciones sancionatorias en curso, o que estén en discusión en sede administrativa se ven afectadas por la decisión judicial que anuló los artículos citados del Decreto 3366 de 2003, que sirven de base para los “códigos” relativos a las infracciones de transporte terrestre automotor, en la medida en que las “infracciones” allí señaladas desaparecieron del mundo jurídico y tales “códigos” registrados en la Resolución 10800 de 2003 perdieron su fuerza obligatoria, por lo que no existe una conducta típica que pueda ser reprochada como infracción de transporte con fundamento en tales normas.
- ii) El “informe de infracciones de transporte” no es representativo o declarativo de una “infracción de transporte”, en tanto se base en las conductas “tipificadas” como tales en los artículos del Decreto 3366 de 2003 declarados nulos o en los “códigos” de la Resolución 10800 que se deriven de ellos y, por lo mismo, no

son el medio conducente para probarlas “infracciones de transporte”. Su utilización como “prueba” en las actuaciones administrativas que se adelanten, viola el debido proceso administrativo, en la medida en que no es representativa o declarativa de una conducta infractora y no puede tener el carácter de prueba válida aportada al proceso. Debe recordarse que el artículo 29 de la Constitución Política establece que es “nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

- iii) En cuanto a los actos administrativos sancionatorios que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, serán los jueces competentes los que deban adoptarla decisión que corresponda, y necesariamente deberán apreciar la declaratoria de nulidad de las normas del Decreto Reglamentario 3366 de 2003 y las consecuencias que tal decisión trae. En las sentencias aportadas en la Audiencia del pasado 13 de febrero, se evidencian anulaciones de sanciones impuestas con base en los “códigos” de la Resolución 10800 de 2003.

De acuerdo a lo anterior, se viola el derecho al debido proceso administrativo cuando se impone una sanción con base en un código previsto en la Resolución 10800 de 2003, siempre que esta se fundamente en alguna de las conductas tipificadas en el Decreto 3366 de 2003 que fueron declaradas nulas; solo en esos casos, el Informe de Infracciones de Transporte no será conducente para probar la infracción objeto de sanción.

En relación con lo anterior, el despacho encuentra que el acuerdo conciliatorio resulta ajustado a la ley, como quiera que el literal d) y e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1993 establece como conducta sancionable “en los casos de incremento o disminución de las tarifas de prestación de servicios no autorizada y; en todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan una violación a las normas en transporte”, cierto es que el código 590 del artículo 1 de la Resolución 10800 de 2003, esto es, “(...) Cuando se compruebe que el equipo está prestando un servicio no autorizado, entendiéndose como aquel servicio que se presta a través de un servicio automotor de servicio público sin el permiso o autorización correspondiente para la prestación del mismo; o cuando se este se preste contrariando las condiciones inicialmente otorgada”.

Así como también que se le dio el carácter de plena prueba al Informe Único de Infracciones de Transporte N° 406820, impuesto al vehículo TZY-135, frente a lo cual ya veíamos que el Consejo de Estado, ha manifestado que ello por sí solo, como fundamento de una sanción, no es representativo o declarativo de una infracción de transporte.

En ese contexto, el acuerdo propuesto se encuentra ajustada al ordenamiento legal y la jurisprudencia del máximo órgano de lo contencioso administrativo en la materia, máxime cuando además se descarta la posibilidad de que se presente un detrimento patrimonial frente al arreglo al que llegaron los extremos de estas diligencias, pues se evita que potencialmente la autoridad deba devolver la cancelado por la sanción, así como de responder por intereses o indexación o cualquier otro concepto.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Examinado el expediente y la prueba recaudada, así como el ordenamiento jurídico aplicable al caso, ya que la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos que permite dar fin a un proceso contencioso administrativo cuando el acuerdo logrado no resulta lesivo al patrimonio estatal, no contraviene el ordenamiento jurídico y tiene el soporte probatorio suficiente para una condena, El Despacho estima que el acuerdo conciliatorio reúne los presupuestos de ley y es posible impartirle aprobación.

#### V. DECISIÓN

Por lo expuesto el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia,



**RESUELVE:**

**PRIMERO. APROBAR** el acuerdo conciliatorio que contenido en el acta No. 20 de fecha 18/11/2020 y transcrito en esta providencia, y celebrado dentro del proceso de la referencia que se adelantó en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurado por **COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA., COOMOTOR LTDA.**, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES**.

**SEGUNDO. DECLARAR** que el acuerdo conciliatorio es total, es decir, finiquita la totalidad de las pretensiones de la demanda, a través de la fórmula conciliatoria planteada por la **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES** y aceptada por la parte demandante.

**TERCERO. COMO CONSECUENCIA** de lo anterior la **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES**, deberá cumplir con las condiciones establecidas en la fórmula de arreglo y en favor de la entidad **COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA. -COOMOTOR LTDA.**

**CUARTO. DECLÁRASE** terminado el presente proceso. La conciliación y el auto que la apruebe tendrán los efectos de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo.

**QUINTO.** En firme la presente decisión, la Secretaría expedirá las copias de llegarse a requerir las piezas procesales que las partes soliciten para los fines de pago pertinentes conforme el artículo 114 del CGP, y archivará el expediente previa anotación en el programa siglo XXI.

Notifíquese y Cúmplase,

**GINA PAMELA BERMEO SIERRA**  
Juez

Firmado Por:

**GINA PAMELA BERMEO SIERRA**  
**JUEZ CIRCUITO**  
**JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA (4)**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

009139b140e622a8b6e325e6a2ff010e1c8bb9ee7bde496b1fd7f20cf9fadf4e

Documento generado en 03/12/2020 08:04:18 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>